

REPÚBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN



SALA LABORAL

Medellín, Julio veintiocho (28) de dos mil veintitrés (2023)

La **SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL** del **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, conformada por los Magistrados Jaime Alberto Aristizábal Gómez quien actúa como ponente, John Jairo Acosta Pérez y Francisco Arango Torres, procede a dictar sentencia de segundo grado, dentro del proceso ordinario radicado con el número 05001310501420170000701, promovido por la señora **BERTHA INES OROZCO ISAZA**, en contra de **PROTECCIÓN S.A.** con la finalidad de resolver el recurso de apelación interpuesto por ésta última frente a la sentencia emitida el 01 de noviembre de 2018 por el Juzgado Catorce Laboral del Circuito de Medellín.

De conformidad con el numeral 1° del artículo 13 de la Ley 2213 de 13 de junio de 2022 “...Por medio de la cual se establece la vigencia permanente del Decreto Legislativo 806 de 2020 y se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia y se dictan otras disposiciones...” se toma la decisión correspondiente mediante providencia escrita número **234**, previamente discutida y aprobada por los integrantes de la Sala.

ANTECEDENTES

Pretende la demandante se declare le asiste derecho a recibir la pensión de sobrevivientes causada por el fallecimiento de su hijo señor Albert Alexis Cardona Orozco; consecuentemente se condene su pago junto con el retroactivo pensional causado a partir del 02/04/2016 incluyendo las mesadas adicionales, los intereses moratorios del artículo 141 de la ley 100 de 1993, las costas procesales y agencias en derecho.

Como fundamento de sus pretensiones expuso que el señor Albert Alexis Cardona Orozco nació el 02/10/1983, y que, para el momento de su fallecimiento, el cual acaeció el 02/04/2016, se encontraba afiliado a Protección S.A., presentando un total de 686.57 semanas cotizadas en toda su vida laboral de las cuales 51 semanas lo fueron en el año inmediatamente anterior a su deceso, dejando acreditado el derecho a la pensión de sobrevivientes.

Que el fenecido no era casado, no tenía unión marital de hecho y no tenía hijos, siendo la demandante, en calidad de madre la única beneficiaria de la pensión de sobrevivientes, pues dependía económicamente de su hijo, quien le suministraba lo necesario para su subsistencia, encargándose del pago del arriendo, de los servicios públicos, vestuario, alimentación, transporte y en general de todos los gastos del hogar.

Que la demandante no trabaja desde el año 2008, por cuenta de una enfermedad en la columna, y que su pareja sentimental, padre del fenecido, abandono el hogar 12 años atrás, y falleció el 12/07/2012.

Que Protección S.A. mediante Rad. 467405 del 13/06/2016 le negó la pensión de sobrevivientes reclamada, bajo el argumento que al momento del fallecimiento del afiliado la madre no dependía económicamente de éste.

Respecto a la demanda presentada, PROTECCIÓN S.A. en su oportunidad procesal expuso:

Que es cierta la fecha de nacimiento, de fallecimiento y el número de semanas causadas por el señor Albert Alexis Cardona Orozco; pero que no es cierta la dependencia económica del afiliado para con su madre, pues el aporte realizado por éste constituía una mera colaboración.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

CONDENÓ a PROTECCIÓN S.A a pagar a la demandante la pensión de sobrevivientes por la muerte de su hijo Albert Alexis Cardona Orozco; reconociendo como retroactivo pensional la suma de \$43.736.217 causado entre el 02/04/2016 y el 31/10/2018. A partir del 01/11/2018 Protección S.A. deberá continuar pagando al demandante la suma de \$1.387.864 que se incrementará anualmente, de conformidad con los mandatos legales y sin perjuicio de la mesada adicional de diciembre. AUTORIZÓ a Protección S.A a descontar del retroactivo pensional reconocido, el valor de las cotizaciones al SSSS causadas, advirtiendo que deberá dicha entidad trasladar la suma descontada a la correspondiente EPS de la demandante. CONDENÓ a reconocer y pagar los intereses moratorios del artículo 141 de la ley 100/1993, a partir del 23/06/2016 y hasta que se verifique el pago total de lo adeudado; y condenó en costas procesales a cargo de PROTECCIÓN S.A. y a favor de la demandante, fijando como agencias en derecho la suma del 7.5% del valor de las condenas.

RECURSO DE APELACIÓN PROTECCIÓN S.A.

Indica que si bien se generó el derecho a la pensión de sobrevivientes pues para el momento del fallecimiento del afiliado éste presentaba las semanas mínimas exigidas; no obstante, la demandante no demostró la dependencia económica pues si bien es cierto se presentó una ayuda económica o una mera colaboración de su hijo, esta no era de tal magnitud o relevancia para el sostenimiento del hogar.

Que el afiliado para el momento del fallecimiento no vivía en el hogar de su madre, aunado a que esta última también recibía ayuda económica de sus otros hijos.

Que no procede el reconocimiento de los intereses moratorios del artículo 141 de la ley 100/1993 pues dicha sanción se da en razón al retardo en el pago de las mesadas pensional, sin embargo en el presente caso no había nació el derecho pensional, pues de la investigación administrativa se demostró que no existía dependencia económica pretendida, aunado a ello es de advertir que el presente reconocimiento se da a través de un postulado jurisprudencial y no legal, siendo necesario revocar dicha condena.

Finalmente solicita se absuelva de las costas del proceso.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

PROTECCIÓN S.A. Expreso que, para acceder a la prestación económica por sobrevivientes, no solo se requiere cumplir con el requisito de semanas de cotización, sino, además, aspectos relativos a circunstancias especiales para los beneficiarios. Para el caso de los padres, se exige respecto del hijo fallecido, la dependencia o subordinación económica a fecha de muerte. Sin la existencia de esa situación a favor de los padres, se hace imposible el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes, siendo en consecuencia solamente posible, realizar la devolución de saldos a que hace referencia el artículo 78 de la ley 100 de 1993.

Si bien es cierto que la dependencia total y absoluta fue declarada inexecutable por la Corte Constitucional a través de la Sentencia C-111 de 2006, el concepto de dependencia económica permanece como presupuesto indispensable para que se configure el derecho a la pensión de sobrevivientes en favor de los padres, lo que significa que, en todo caso debe existir una relación de sujeción de los padres en relación con la ayuda pecuniaria que le proporcionaba el hijo.

Que frente a los intereses moratorios se hace necesario indicar que, la aplicación de esta figura jurídica tan solo se presenta cuando causado un derecho no es reconocido y pagado en la oportunidad establecida por la ley por la entidad competente para ello, lo que para el presente asunto no tiene aplicabilidad, si se tiene en cuenta que el derecho a la pensión de sobrevivientes pretendida por la parte actora no ha nacido a la vida jurídica por falta de acreditación de los requisitos establecidos por la ley para ello, de ahí que no se ha incurrido en incumplimiento alguno frente a la demandante.

Que no obstante lo anterior, y de considerar que a la demandante si le asiste el derecho a la pensión de sobrevivientes por la muerte de su hijo Albert Alexis, esta obligación a cargo de mi representada tan solo surge en virtud de una orden judicial, y no por el cumplimiento de los requisitos establecidos por la ley.

PROBLEMA JURÍDICO

Determinar si la accionante en calidad de madre del afiliado fallecido acredita el requisito de dependencia económica establecido en el literal d) del artículo 74 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, no en forma total y absoluta, pero si determinante para una calidad de vida digna, como se explica por la jurisprudencia constitucional y especializada, o si por el contrario, la razón está de parte del fondo accionado.

CONSIDERACIONES

Sea lo primero indicar que atendiendo a la fecha del deceso del afiliado; esto es, el 02 de abril de 2016, y al no existir discusión frente a la causación del beneficio pensional, así como que no tenía beneficiarios con mejor derecho, es viable el reclamo de la pensión por su progenitora, quien en los hechos de la demanda afirma que dependía económicamente del causante hasta la fecha de su deceso.

Ahora, la dependencia económica, no debe identificarse con una sujeción total y absoluta a los ingresos que percibía el causante, de manera que no excluye la

existencia de otras rentas o fuentes de recursos, propios o provenientes de otras personas, pues no es necesario que el beneficiario se encuentre en estado de mendicidad o indigencia, como se explica por la Corte Constitucional en Sentencia C – 111 de 2006 y por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencias SL816-2013, SL14923-2014, SL6558-2017 y SL4025-2018, entre otras, en las que además se advierte que la dependencia no debe ser total ni absoluta, es decir, que, si bien debe existir una relación de sujeción de los progenitores en relación con la ayuda del hijo, tal situación no excluye que puedan percibir rentas o ingresos adicionales, siempre y cuando, éstos no los convierta en autosuficientes (SL400-2013, SL816-2013, SL2800-2014, SL3630-2014, SL6690-2014, SL14923-2014, SL6390-2016, SL11155-2017 y SL898-2022), sin que signifique *«que cualquier estipendio que se le otorgue a los familiares pueda ser tenido como prueba determinante para ser beneficiario de la pensión, pues esa no es la finalidad prevista desde el inicio, ni menos con el establecimiento en el sistema de seguridad social, cuyo propósito, se insiste, es servir de amparo para quienes se ven desprotegidos ante la muerte de quien les colaboraba realmente a mantener unas condiciones de vida determinadas»*, pero en todo caso, debe existir un grado cierto de dependencia, que se ha identificado a partir de dos condiciones: i) una falta de autosuficiencia económica, lograda a partir de otros recursos propios o de diferentes fuentes; ii) y una relación de subordinación económica, respecto de los recursos provenientes de la persona fallecida, de manera que, ante su supresión, el que sobrevive no puede valerse por sí mismo y ve afectado su mínimo vital en un grado significativo.

De lo que se sigue que la dependencia económica requerida por la ley, para adquirir la condición de beneficiario de la pensión de sobrevivientes, debe contar cuando menos con los siguientes elementos: i) debe ser cierta y no presunta; ii) la participación económica debe ser regular y periódica; iii) las contribuciones que configuran la dependencia deben ser significativas, respecto al total de ingresos de los beneficiarios de manera que se constituyan en un verdadero soporte o sustento económico de éste.

Así, la dependencia económica tiene como rasgo fundamental el hecho que, una vez fallecido el causante y, por lo mismo, extinguida la relación de contribución

económica hacia el presunto beneficiario, la solvencia de éste último se ve amenazada en importante nivel, de manera que pone en riesgo sus condiciones dignas de vida -sentencia SL 886-2013-, ello, si se tiene en cuenta que la finalidad de la pensión de sobrevivientes no es enriquecer el patrimonio de sus beneficiarios, sino compensar la ausencia material que en la familia se presenta cuando uno de sus miembros fallece, de allí que la legislación permita una reparación desde la seguridad social, sin que sea necesario que los padres del causante se encuentren en un estado de indigencia para tener derecho a ella – sentencia SL1386-2022-.

De igual forma es imperioso referir, que el hecho de que la persona que reclama la pensión de sobrevivientes reciba unos ingresos, ello por sí solo no lo hace autosuficiente en términos económicos, ni significa que la colaboración que le brindaba su descendiente no fuera determinante para procurarse una vida digna, por cuanto, como lo ha enseñado la Jurisprudencia del órgano de cierre de la Jurisdicción Ordinaria Laboral, el hecho de que existan otras contribuciones o rentas en favor de los padres del afiliado fallecido no excluye su derecho a obtener una pensión de sobrevivientes. La única condición que debe cumplirse es que tales ingresos no sean suficientes para garantizar su supervivencia en condiciones mínimas, dignas y decorosas (SL529-2020, SL3536-2021, SL475-2022).

Finalmente, debe soslayarse que la carga de la prueba de la dependencia corresponde a los padres, y cumplido este requisito, será la entidad demandada la que deberá demostrar, la existencia de ingresos o rentas propias que le permitan ser independiente económicamente, esto es, deberán aportarse medios de convicción que acrediten la autosuficiencia económica para solventar sus necesidades básicas (SL, 24 nov. 2009, rad. 36026, SL6390-2016, SL989-2022 y SL1604-2022).

MATERIAL PROBATORIO

- Interrogatorio de parte demandante – Señora **BERTHA INES OROZCO ISAZA.**

Manifiesta que su esposo la abandonó hace 10 o 12 años, que desde dicha fecha nunca les colaboró económicamente, y que falleció el 12/07/2012. Que su hogar estaba conformado por sus 3 hijos, el mayor de ellos de nombre Albert Alexis Cardona Orozco laboraba en una empresa de sistema, que era quien le colaboraba económicamente en la casa, para el mercado, el arriendo, sus gastos personales y la tenía afiliada a Salud; que éste era soltero, no tenía hijos ni cónyuge o compañera permanente.

Que su hijo Albert Alexis Cardona Orozco se había ido a vivir solo, como 6 u 8 meses con anterioridad a su fallecimiento, pero que a pesar de no convivir los últimos días en su grupo familiar, siempre le cubrió sus necesidades básicas, que en promedio le aportaba entre 800 y 850 de arriendo, más la alimentación y los gastos personales que podría ser de alrededor de 150 mil pesos mensuales.

Que luego del fallecimiento de su hijo se quedó sin cobertura de Salud, y arrendó un cuarto de habitación para ayudarse con sus gastos económicos, que por dicho arriendo un estudiante le pagaba como 650 mil mensuales, y que por esa época su otro hijo James empezó a trabajar aportando entre 700 y 900 mil pesos, pero que no recuerda exactamente si dichos ingresos adicionales fueron días antes o después del fallecimiento de su hijo Albert Alexis.

- Declaración del señor Jhon James Cardona Orozco (hijo de la demandante).

Que en la actualidad tiene 26 años, que su hermano trabajaba como desarrollador de software y que llevaba más o menos 8 meses en la última empresa. Que para el momento de fallecimiento de su hermano éste vivía solo hacia 6 meses, pero que antes de eso siempre vivió con él y su mama en una casa arrendada. Que su

mama (demandante) era ama de casa, que su papa falleció en el año 2012 y su hermano no tenía cónyuge o compañera permanente.

Que para el año 2016 los gastos de la casa eran: arriendo \$900.000, servicios públicos \$500.000, alimentación \$700.000, más los gastos personales de la mama y el transporte; y que era su hermano Albert quien cubría los pagos de arriendo, servicios, aparte de los gastos personales de su madre y la tenía afiliada a la EPS.

Afirma que dicho aporte fue constante, aún cuando se fue a vivir solo, porque él (declarante) apenas estaba empezando a trabajar, y finalizando los estudios como practicante.

Que luego del fallecimiento de su hermano Albert, no les alcanzaba la plata y a su madre le toco arrendar una habitación de la casa a un joven universitario, para cubrir la falta del aporte de su hermano, y que a él le toco ponerse a trabajar de lleno.

- Jhon David Gutiérrez (amigo de la familia)

Que conoció al señor Albert a finales del año 2000, como compañero de estudio, pero que fueron muy buenos amigos. Que antes de fallecer vivió solo, pero toda la vida estuvo pendiente de la mama y sus hermanos.

Que la demandante no trabajaba para el momento del fallecimiento de Albert en la medida que presentó un problema en la columna, razón por la cual el fenecido se hizo cargo económicamente del hogar, especialmente de los gastos de la mama.

Que conoce que el papa de los hijos de la demandante falleció cree que en el año 2014, y sabe que lo devengado por el señor Albert era para solventar los gastos de la casa de la demandante. Afirma que desconoce con exactitud el valor del aporte, pero si, que el señor Albert siempre fue la cabeza del hogar, tanto porque lo veía, le prestaba plata o éste le comentaba.

Al hacer un examen conjunto de la prueba a la luz de las reglas de la sana crítica, artículo 61 del C. P. T. y de la S.S., se advierten, contrario a lo expuesto por la recurrente, los elementos establecidos por la jurisprudencia constitucional y especializada para demostrar la dependencia económica de la demandante frente a su hijo al momento del fallecimiento, que es cuando ocurre el riesgo protegido y se causa el derecho a la prestación por muerte, toda vez que el designio de ésta, es evitar el desamparo al que se ve enfrentado el padre o madre por la muerte de descendiente que era su soporte económico, lo que en este caso se demuestra, pues de los medios de convicción, se logra colegir que la ayuda que entregó en vida el joven Albert Alexis Cardona Orozco a su madre no se trataba de cualquier colaboración, todo lo contrario, era relevante, esencial y determinante para el sostenimiento de la actora y de su núcleo familiar, el cual estaba conformado por sus otros 2 hijos, por tal, al haber sido Albert, el encargado de cubrir los gastos del hogar, tales como arriendo, alimentación, y servicios públicos, tal y como lo explicaron los testigos allegados, siendo incluso el señor Jhon David Gutiérrez la persona que le prestaba plata para cubrir en ocasiones los gastos de la casa; aunado a que la actora se encontraba registrada como beneficiaria ante el sistema de seguridad social en salud, como beneficiaria de su hijo, por lo cual considera la Sala que el aporte o contribución económica entregada por el fenecido era de tal trascendencia para la subsistencia digna de la madre, tal y como quedó establecido, y lo ha manifestado la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia entre otras en sentencias SL SL4217-2018, SL1340-2022 y SL1604-2022. Es más, considera la Sala que dicha ayuda o colaboración fue de tal magnitud que una vez falleció el hijo de la demandante, ésta se vio en la necesidad de alquilar una habitación de la casa donde habitaba para suplir la ayuda económica que recibía de su hijo, y quedando probada, para el caso, la relevancia de la ayuda económica de su descendiente, le correspondía a la demandada, atendiendo la jurisprudencia de la Corte Suprema Sala Laboral, acreditar la existencia de ingresos o rentas propias que le permitan ser independiente económicamente, brillando prueba alguna al interior del proceso.

Finalmente, frente a la inconformidad relacionada con el pago de los intereses moratorios, baste decir que la Jurisprudencia del órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria laboral, ha sostenido que dicha imposición es procedente, por regla general, cuando existe mora en el reconocimiento y pago de las mesadas pensionales, sin que sea relevante analizar la existencia o no de buena fe por parte del obligado y aun cuando este hubiese tenido el convencimiento de no otorgar la pensión, como quiera que su naturaleza es resarcitoria, no sancionatoria, pues su finalidad es mitigar los efectos adversos que produce la tardanza en el pago de la pensión en favor de aquel a quien por derecho le corresponde la prestación (SL8949-2017, SL668-2020, SL1023-2020, SL1064-2022), también lo es que existen situaciones excepcionales en las cuales no resultan viables los intereses moratorios y el deudor puede ser exonerado del pago de ellos, por tal, deben analizarse las razones que tuvo la entidad para no pagar oportunamente la prestación, las que en este caso no resultan razonables debido a que según comunicado del 13 de junio de 2016, se le anuncio a la actora que *“...no procede el reconocimiento de la pensión de sobrevivencia ..., teniendo en cuenta que al momento del fallecimiento del afiliado y de acuerdo al trámite administrativo adelantado ..., se constató que la madre no dependía económicamente del fallecido, ya que fue posible comprobar que sin el aporte del afiliado fallecido, la madre puede subsistir sin ser vulnerado el mínimo existencial”*, sin embargo, no aportar medios que den cuenta de la investigación que realizaron a fin de llegar a tal conclusión, por tal, al no verificarse las razones en las cuales se basó la entidad para concluir la no dependencia económica, procedente resulta la imposición de dichos intereses, debiéndose confirmar así la sentencia recurrida.

Finalmente, el artículo 365 del Código General del Proceso consagra un criterio objetivo para la imposición de las costas, orientado a que éstas sean cubiertas por la parte que pierde el litigio, sin hacer distinción sobre la persona que debe correr con la obligación una vez decidida la litis. Y como las pretensiones de la demandante prosperaron en este juicio, no así el recurso de apelación interpuesto por la demandada resulta razonable imponer al pago de las costas del proceso a cargo de Protección S.A. En consecuencia, se confirmará en este punto la decisión.

Costas Procesales en esta instancia, a cargo de **PROTECCIÓN S.A** al no prosperar el recurso de apelación interpuesto, y a favor de la parte demandante. Se fijan como agencias en derecho en esta sede, la suma de UN MILLÓN SEISCIENTOS SESENTA MIL PESOS.

En mérito de lo expuesto, la **SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL** del **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Catorce Laboral del Circuito de Medellín el 01 de noviembre de 2018, dentro del Proceso Ordinario Laboral promovido por la señora **BERTHA INES OROZCO ISAZA** en contra de **PROTECCIÓN S.A**, conforme a lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO: Costas Procesales en esta instancia, a cargo de **PROTECCIÓN S.A** al no prosperar el recurso de apelación interpuesto, y a favor de la parte demandante. Se fijan como agencias en derecho en esta sede, la suma de UN MILLÓN SEISCIENTOS SESENTA MIL PESOS.

Lo resuelto se notifica por **EDICTO**. Se ordena regresar el proceso al Juzgado de origen.

Se ordena regresar el expediente al Juzgado de origen.

Los Magistrados,

Jaime Alberto Aristizábal Gómez

John Jairo Acosta Pérez

Francisco Arango Torres

Firmado Por:

Jaime Alberto Aristizabal Gomez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

John Jairo Acosta Perez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Francisco Arango Torres
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **76bf94a58fc4fa2f7712dd98d8f1974dd90942fa9f81fff4187c13a54306f02e**

Documento generado en 28/07/2023 03:18:48 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>